

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por el C. Eusebio Carreon, contra el C. Juez 3º local de la capital de ese Estado, por violacion de garantías.

EXPEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 2º de Distrito:

Aposar de que en el auto que recayó al juicio promovido por el C. Eusebio Carreon contra una persona que le reclama el pago de aeróbatas, están perfectamente explicados los hechos que han dado motivo á considerar inadmisibile el recurso de amparo interpuesto por el C. Carreon; la autoridad ejecutora de la sentencia de que este se queja, acaba de rendir el informe que está á la vista; como de dicho informe aparece que el C. Carreon, resistió el pago de la deuda que se le reclamaba, se trabó ejecución en los bienes del deudor, quien á nada por este acto se opuso, segun consta del informe de la autoridad ejecutora. Basta ese sencillo razonamiento, para conocer que el negocio es judicial en todas sus partes; y que por lo mismo no toca á los tribunales federales resolver la cuestion que se suscite sobre si es mas ó es menos lo que se satisfiso por el deudor al acreedor. Uno y otro tienen sus derechos expeditos, conforme á las leyes del Estado, para deducirlo como les convenga; pues aun cuando á tal cosa se rehusan los interesados en pro del amparo, fundándose en la inconstitucionalidad de las autoridades, esto no pasa de ser una burla y menosprecio inauditos, no solo contra ellas, sino hasta contra los demas poderes Supremos de la República que no desconocen en lo mas mínimo el origen legítimo de dichas autoridades.

Prender que los jueces federales se constituyan censores de los actos de aquellas en la órbita de sus facultades legales, equivale á llegar al triste caso de que no

haya en un Estado quien ejerza la justicia, atenta la teoría absurda de alegarse *ilegitimidad*, promoviendo recursos de amparo, en los que como se sabe, no pueden los jueces federales hacer declaracion alguna general.

Por otra parte, no se desconoce el principio establecido de que nada tienen que hacer en materias judiciales, los juicios de amparo: ¿A qué entonces suponer garantías violadas por una sentencia condenatoria, pago de contribuciones, reintegro de dotes y otras muchas operaciones que no ajustan de ningun modo la esencia de sus garantías?

Si pues, la ley misma que se invoca pugna abiertamente con el sistema adoptado, de acudir á los tribunales de la federacion para que impidan, no la correccion de los abusos de una autoridad, sino el que se lleven á cabo los procedimientos de un juicio en que se administra la justicia, no se comprende verdaderamente, que se quiera representar un derecho que no cabe en el espíritu, ni en la letra de la propia ley.

Creo inútil añadir nuevas observaciones á la presente cuestion, pues que ella revêla á larga distancia, el móvil que la impulsa; y en esa virtud, y concretándome á lo expuesto, mi parecer es que no ha lugar al recurso de amparo que se solicita,

Primero: porque el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, lo prohíbe en asuntos judiciales.

Segundo: porque conforme al art. 2º de la ley referida, no compete á los jueces de Distrito hacer declaraciones generales como la de anticonstitucionalidad de las autoridades; y 3º porque están justificados los procedimientos del Juez que sentenció al C. Eusebio Carreon al pago de una deuda personal.

En consecuencia, así pido al C. Juez se sirva resolver, condenando al responsable á la multa respectiva.—Protesto etc.—Aguascalientes, Abril 17 de 1873.

Otro sí digo:—Que por haberse aumentado varios traslados sobre esta clase de juicios en la promotoría que desempeño, y por diversos negocios de responsabilidad en mi encargo de jefe de Hacienda, no fué posible evacuar dichos traslados en el término por el que se me corrieron.—Fecha ut. supra.—*L. Ocañiz.*

Es copia que certifico. Aguascalientes Abril 18 de 1873.—*Diego Ortigosa.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Aguascalientes, Mayo 16 de 1873.—Vistos: Constando en el presente juicio que D. Eusebio Carreon, en Agosto del año próximo pasado, en juicio verbal fué sentenciado por el juzgado 3º local de esta Ciudad á pagar á D. Máximo Balderrama una cantidad de dinero; cuya sentencia, habiendo sido revisada por el Supremo Tribunal de justicia del Estado, conforme á las leyes particulares del mismo, fué confirmada en lo principal, resultando el Sr. Carreon condenado á pagar la suma de catorce pesos, segun aparece del testimonio de la Superior ejecutoria, visible á fojas 9 frente y vuelta, de lo que sobrevino despues que la parte del Sr. Balderrama, apoyado con aquel Superior despacho, intentara el juicio ejecutivo correspondiente, pidiéndose requiriese de pago á su contraparte por la cantidad indicada y ademas por las costas y gastos que originasen hasta conseguirlo; de donde provino que la parte del Sr. Carreon no habiendo efectuado el pago, presentando el mismo un mostrador, unos casilleros y cielo de una tienda para que se trabara la ejecucion respectiva, la cual llevada adelante y mediante consulta de asesor que lo fué el Lic. D. Esteban Parga, nombrado expresamente por el Sr. Balderrama como actor y el apoderado del Sr. Carreon como reo, dió por resultado que los bienes embargados se rematasen judicialmente, habiendosido con anterioridad justipreciados en la cantidad de 48 po-

TOMO IV.—PARTE II.

ses dos reales, y de cuyo justiprecio se rebajó una tercera parte en el remate; mas al ir el depositario á sacar los bienes rematados, los habitantes de la casa del ejecutado los resistieron así como D. Macdonio Marin, que en ese acto se presentó alegando que era apoderado del Sr. Carreon; que la ejecucion trabada en aquellos bienes era ilegal porque se habia contravenido á las leyes, y otras mil cosas que es por demas referir, resultando de esa oposicion que el ministro ejecutor diera parte al juzgado respectivo y que esta autoridad solicitase el auxilio de la fuerza armada, y mediante este arbitrio se sacaron los bienes que se entregaron al depositario, y este los entregó al comprador á quien se adjudicaron en remate, con lo que terminó el juicio y se dió punto al negocio, quedando constancia en el (fojas 14) de la distribucion del producto de los bienes rematados.—Visto ahora el escrito de S. de Febrero con que dan principio estos autos, en el que la parte del Sr. Carreon solicita lo ampare la justicia federal contra la ejecucion que el juez 3º local llevó á efecto y de que se acaba de hacer mérito, por creer que contra su persona se han violado las garantías individuales que otorga la constitucion general de la República en sus artículos 8, 16 y 27, cuya violacion se cree comprendida en la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, alegando para ello, ó negando mas bien la competencia de las autoridades judiciales de este Estado, por haber ejercido contra sus intereses los actos de ejecucion y remate ya referidos: Visto el auto del once del mismo mes que pronunció el Sr. Juez de Distrito, que en esa época recibió el ocurso del mismo Sr. Carreon, en cuya providencia desecha la solicitud y niega el recurso que impetró el petente: Visto tambien el superior auto que en catorce de Marzo próximo dictó la Suprema Corte de Justicia, en que manda devolver al Juzgado de su origen las diligencias practicadas, para que se sustancié el juicio con arreglo á derecho y se dé cuenta

con él en estado: Visto el testimonio del juicio que como justificante y por via tambien de informe remitió el Sr. Juez 3º local, contra cuyos procedimientos pretende el Sr. Carreon lo ampare y proteja la justicia de la Union, cuyo testimonio obra de fojas 8 á la 14 de estos autos: Visto el pedimento que hace el Sr. Gefe Superior de Hacienda, en uso de la representacion y voz fiscal que ejerce por ministerio de la ley: Visto el auto de 19 de Abril, en que se mandó recibir este negocio á prueba por el término de 8 dias; y el escrito que en 26 del mismo entregó el Sr. Carreon á las oraciones de la noche al ministro executor de este juzgado, en cuyo escrito promueve diversas pruebas, intentando ademas que este Juzgado ocurriese al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como al Sr. Juez que lo ejecutó, á solicitar los testimonios que expresa en los dos puntos primeros de su curso, á fojas 18, y por lo que en 28 del mismo mes decretó este propio juzgado que previa citacion se recibieran las pruebas que pretendia el promovente; pero previniéndole al mismo tiempo que directamente ocurriese el mismo como interesado á solicitar de los Tribunales del Estado los testimonios de las piezas que indicaba: Vista la prueba testimonial que por el referido escrito produjo, y corre de fojas 19 vuelta á la 20 tambien vuelta; y visto en fin el alegato de buena prueba presentado por el interesado, con todo lo demas que de los autos resulta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que el Sr. Carreon al tratar de incompetentes al Juzgado 3º local así como al Supremo Tribunal de Justicia, que lo condenaron al pago de los catorce pesos, no examinó la cuestion previamente, ni vió que segun las leyes fundamentales y reglamentarias de justicia del Estado, son las autoridades judiciales competentes para conocer y decidir en asuntos del fuero comun y ordinario, como el que ha querido tomar de base para pretender que la Justicia federal lo ampare; pues si hubiera visto con de-

tenimiento el artículo 115 de la Constitucion general de la República, que previene se dé entera fé á los actos públicos y procedimientos judiciales de los empleados de los Estados; Cap. 2º tít. 6 de la Constitucion particular de este Estado y el artículo 161 de la ley de 29 de Noviembre de 1858 aquí vigente, así como las demas leyes análogas expedidas por esta Legislatura particular en diferentes épocas, y las 1ª tít. 14 Part. 3ª y 21, tít. 4º Lib. 6º de la Novísima Recop, ciertamente no habría pensado decir, ni menos sostener que no son competentes las autoridades judiciales del propio Estado para conocer, decidir y ejecutar las resoluciones ó sentencias que en aprecio de su ministerio dictaren en los asuntos que legalmente deban conocer.

Considerando igualmente: que en toda la secuela de este juicio, la parte del Sr. Carreon no probó, ni intentó siquiera probar la incompetencia de los Tribunales que lo sentenciaron al pago de la deuda por que fué requerido y ejecutado; siendo así que solo esa incompetencia plenamente justificada, bastaría por si sola para tener por violada la garantía que otorga el artículo 16 de la Carta fundamental de la República, y conseguir que la Justicia de la Union amparase al solicitante, quien en vez de haberse ocupado de este particular, se redujo á tratar mala ó indebidamente de los procedimientos judiciales que tuvieron lugar en los dos juicios que se instauraron contra él; por lo que con arreglo al artículo 8º de la ley de 20 de Enero ya citada, es fuera de toda duda que no cabe el amparo que pretende.

Considerando así mismo: que el propio Sr. Carreon, en los razonamientos contradictorios de que se ha valido en todos sus escritos, ha tratado de convencer torpemente, que el no presentó voluntariamente los bienes en que se trabó la ejecucion de que se ha hecho mérito y se le remataron, para deducir de aquí que ha sido molestado en sus posesiones, contra lo prevenido en el artículo 16 de la Constitucion general, sin ad-

ertir, quizá con malicia, que en el testimonio del juicio que remitió el C. Juez 3º local al D. Mariano Salazar, sobran pruebas de lo contrario, esto es, que voluntariamente hizo la presentación de esos bienes; viniendo en apoyo de esto, la prueba testimonial que la misma parte del Sr. Carreon produjo, pues entre los testigos que ha presentado al Juzgado, uno de ellos fué el ministro ejecutor que lo embargó, llamado Pablo Gonzalez, expresamente declara: que la parte que lo presenta, voluntariamente señaló los bienes en que se había de trabar y se trabó a ejecución, suplicando que esos bienes no se movieran de allí, mientras que procuraba tener un arreglo con su acreedor; que fué sin duda cuando lo propuso el tejamanil de que hace mérito el mismo petente y que expresamente refiere la constancia del testimonio de fojas 10, debiendo además advertir, que D. Macedonio Marin en el acto celebrado en el Juzgado correspondiente el veinticuatro de Octubre, al objetar la ejecución alega, no el que los bienes embargados no fueron presentados por su representado, sino el que se invirtió el orden que las leyes establecen, mediante á que se embargaron bienes inmuebles en vez de haber sido muebles, con lo cual dió á entender por lo menos, que no comprendió ni menos supo aplicar las doctrinas de los autores que cita, y que si hubiera visto siquiera la ley 4ª, tít. 29, Part. 3ª, habría leído sancillamente y acaso habría comprendido mejor las doctrinas y disposiciones que citó, puesto que dicha ley dice que: *"Muebles son llamadas todas las cosas que los omes pueden mover de un lugar á otro, et todas las que se puedan por sí mover naturalmente"* y que por lo mismo, al señalar el Sr. Carreon esos bienes que se le ejecutaron, no se contravino á la orden que demarca la ley 12, tít. 28 lib. 11 de la Novísima Recop, que en el fuero comun establece el orden de las ejecuciones.

Considerando: que el Sr. Carreon en todos sus escritos y especialmente en su último alegato, trata no solo con palabras poco

comedidas á las autoridades judiciales del Estado, puesto que al hablar del Supremo Tribunal, usa de voz despreciativa de *"el llamado Tribunal"* y al referirse al Juzgado 3º local que lo mandó ejecutar, lo trata de ladrón, al decir que lo ha *"escamoteado"* la pequeña suma sobrante del valor en que se le vendieron los bienes rematados, después de haberse pagado el crédito que le demandaron y las costas de la ejecución, solo porque ni al mismo Sr. Carreon ni á su apoderado les han ido á rendir la cuenta de la distribución que se dió al dinero que produjeron los bienes rematados; siendo así, que ninguno de estos Señores se ha presentado al Juzgado ni á pedir esa distribución, ni á recoger el sobrante de ese dinero; y que eso adandono de su parte, ni autoriza al peticionario para insultar la autoridad de quien habla, y lo hace acreedor á una seria reprensión, que este Juzgado con apoyo de lo dispuesto en los artículos 167, 168 y 169 de la ley orgánica de 4 de Mayo de 1857, se ve en la necesidad de no omitir, á fin de sostener siempre el principio del respeto á las autoridades y á la ley; y sobre cuyo principio es necesario advertir aquí, que si bien el Sr. Carreon expresamente ha manifestado que se ha negado á comparecer ante las autoridades judiciales del Estado por no reconocerlas, ciertamente ha faltado á la verdad, puesto que desde un principio contestó la demanda que ante el mismo Juzgado 3º local puso el Sr. Balderrama en su contra, usó de la reconvencción, adujo pruebas y demas; en el segundo juicio, se le requirió de pago y presentó bienes para la ejecución, habiéndose retirado en seguida de este lugar, con lo que dió causa para que se le declarara rebelde; pero á continuación se presentó su apoderado D. Macedonio Marin con instrucciones de su representado, pidiendo se le alase la rebeldía á este mismo, formando alegaciones y nombrando asesor; y finalmente, este propio Sr. Marin en representación de su comitente, ocurrió ante el Supremo Tri-

bunal de Justicia del Estado, formulando quejas; pretendiendo al fin, que este Juzgado de Distrito, rebajando su dignidad se convirtiese en procurador ó mandatario del mismo Sr. Carreon, para ir á solicitar de aquellas autoridades los testimonios que solo á este mismo Sr. interesaban individualmente, sin que obstará ya el inconveniente de no reconocimiento de que hace mérito; resultando de todo justificada la malicia y poca buena fé con que se ha conducido el promovente y que lo hacen acreedor á la multa que impone el artículo 16 de la ley de 20 de Enero ya precitada; pero que parece por la misma ley reservada á la Corte Suprema de Justicia la imposición de esa pena. Por todas las razones que quedan expuestas y con apoyo de las disposiciones legales de que hasta aquí se ha hecho mérito, este Juzgado de Distrito definitivamente, falla con las proposiciones siguientes:

Primera: La Justicia federal no ampara ni protege á D. Eusebio Carreon, contra los procedimientos judiciales del Juzgado 3º local que lo embargó y le mandó rematar los bienes embargados, para cubrir el crédito que lo demandó al mismo Sr. Carreon D. Máximo Balderrama.

Segunda: Queda al cargo de la Suprema Corte de Justicia el imponer la multa de cien pesos de que trata el artículo 16 de la ley de 20 de Enero, siempre que esa Superioridad lo crea justo.

Tercera: Por las faltas que el Sr. Carreon ha cometido contra las autoridades judiciales del Estado, y especialmente contra el C. Juez 3º local, de quien antes se ha hablado, se le multa en la cantidad de veinticinco pesos, que enterará en la gefatura superior de hacienda de este Estado, sin que por esta pena se menoscaben los derechos del Juzgado 3º local, que quedan á salvo en todo y para todo.

Cuarto: Notifíquese esta sentencia y remítase todo á la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos á que

haya lugar, sacándose las copias respectivas para que se publiquen por los periódicos, como está mandado por la ley.—El Lic. J. Adame Juez 2º suplente de Distrito, lo proveyó y firmó.—Doy fé.—*Pedro J. Adame.*—*S. Arteaga.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, 17 de Mayo de 1873.—*S. Arteaga.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 11 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por D. Eusebio Carreon contra el Juez 3º local de esa Ciudad que conoció de una demanda verbal sobre pesos, entablada contra el quejoso por D. Máximo Balderrama, con cuyo acto cree Carreon vulneradas en su persona las garantías á que se refieren los artículos 8º, 16 y 27 de la Constitución federal; y considerando en primer lugar: que el Juez 3º local de Aguascalientes obró en el caso dentro de la esfera de sus atribuciones, sin atacar por lo mismo ninguna garantía individual; y en segundo, que Carreon entabló y prosiguió este juicio de amparo con perfecto conocimiento de que, en casos semejantes se ha negado el amparo, lo cual manifiesta la mala fé con que en este se ha procedido, y hace merecedor al quejoso de imponerle la multa respectiva con arreglo de lo que dispone el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869; por lo expuesto y de conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la Constitución general, se decreta: que se reforma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 16 del próximo pasado Mayo, por el Juez de Distrito de Aguascalientes; y se declara: Primero: Que se confirma dicha sentencia en la parte que dispone que la Justicia federal no ampara ni protege á D. Eusebio Carreon, contra los procedimientos judiciales del Juzgado 3º local que lo embargó y le mandó rematar los bie-

nes embargados para cubrir el crédito que le demanda al mismo Sr. Carreon D. Máximo Balderrama. Segundo: Se condena á D. Eusebio Carreon al pago de una multa de cien pesos. Tercero: Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron, respecto del primero y tercer punto y por mayoría respecto del segundo, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 21 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por José de la Luz Ruiz, contra la providencia dictada por el C. Gefe político de ese Distrito que lo consignó al servicio de las armas.

Sentencia del C. Juez de Distrito,

“Puebla, Mayo 26 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Juan Ruiz contra el C. Gefe político, por haber destinado á su hijo José de la Luz Zenaido al servicio de las armas; el escrito de queja; el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado y cuanto mas ha sido de verse. Considerando: que el quejoso ha fundádose para solicitar el amparo de la Justicia federal,

en lo dispuesto por el artículo 59 de la Constitucion, en razon de que la autoridad política, ha violado las garantías que otorga ese artículo con haber destinado á su hijo al servicio de las armas, porque aunque dió su consentimiento, siendo menor de edad no ha tenido capacidad legal para comprometerse; que ha probado plenamente que José de la Luz Zenaido Ruiz solo tiene catorce años y por lo mismo no ha podido contratar sin la autorizacion de su padre, y que al no estar este conforme en que el hijo fuera soldado, lo favorece el artículo de la Constitucion en que se apoya. Por estas consideraciones, y en atencion á lo dispuesto por el artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. José de la Luz Zenaido Ruiz, por haber sido destinado á servir en el ejército, por el C. Gefe político. Hágase saber, sacándose las copias correspondientes para su publicacion en el periódico oficial y Semanario Judicial, y hecho, elévense estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Lo mandó y firmó el C. Juez de Distrito de este Estado, por ante mí de que doy fé.—*Antonio Rivero.*—*Felipe de J. Almazan.*”

Es copia que certifico, para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion. Puebla de Zaragoza, 27 de Mayo de 1873.—*Felipe de J. Almazan.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Junio 9 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el C. Juez de Distrito del Estado de Puebla por el C. Juan Ruiz, en favor de su hijo José de la Luz, contra la providencia que le retiene en el servicio de las armas; Considerando: que del expediente consta, que la consignacion de José de la Luz Ruiz, fué hecha sin prestar su consentimiento de una manera legal